Imprimir

El próximo 29 de octubre tendrán lugar las elecciones regionales mediante las cuales se elegirán 32 gobernadores, 418 diputados para las asambleas departamentales, 1102 alcaldes, 12072 concejales y 6513 ediles que conformarán las Juntas Administradoras locales. Las mismas se celebrarán en un ambiente enrarecido por la presencia de candidatos inhabilitados o relacionados con actos de corrupción, apoyos opacos, acusaciones, mentiras, difamaciones y estigmatizaciones. Algunos comentaristas y analistas políticos han planteado, inclusive, que estas elecciones pueden ser vistas como un plebiscito contra el gobierno del presidente Petro y un castigo a sus errores lo que afectaría su gobernabilidad, subvalorando el hecho de que en Colombia el comportamiento y las dinámicas regionales son muy diferentes a los que se dan en el nivel nacional.
Ciertamente, la gobernabilidad está relacionada con las capacidades de un gobierno para concretar sus necesidades y materializar sus planes, así como con su interacción con los gobernados y su capacidad para satisfacer sus necesidades. Esta circunstancia genera tensiones permanentes entre las partes y pone a prueba el sistema de gobierno como productor de decisiones políticas, así como su capacidad para estar a la altura de los problemas a resolver. En otros términos, establecer la relación entre elecciones regionales y gobernabilidad implica, por un lado, tomar en cuenta la naturaleza del sistema político en general con los medios disponibles de un gobierno para llevar a buen puerto sus políticas públicas y, por otro, las percepciones y las valoraciones de la ciudadanía.

Es evidente que toda elección a nivel nacional es un termómetro tanto para la gestión del Gobierno como del alcance de los partidos políticos. En este orden de ideas, es lógico suponer que si los elegidos comparten la visión del Gobierno, la ejecución de sus políticas encontrarán menos obstáculos para su realización; sin embargo, no se puede perder de vista la naturaleza de las correas de transmisión entre lo local y lo nacional, como tampoco los medios con los que cuentan los distintos actores en la arena política donde los intereses particulares también cuentan.

Indudablemente, la popularidad del presidente Petro ha bajado, tal como lo indican los frecuentes sondeos de opinión que realiza la oposición y los comentarios que se escuchan en

los medios de comunicación y las redes sociales que alimentan la fuerte polarización que se percibe en el ambiente.

Según las encuestas y los comentarios que difunden los medios de comunicación masiva, los resultados no serán muy favorables al Gobierno, sobre todo en plazas importantes como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla o en ciudades como Valledupar donde se han coaligado todos los partidos tradicionales para cerrar el paso a los partidarios de Petro y sus reformas.

Aun asumiendo este dato que muchos dan por hecho, ello no equivale a un desastre para la gobernabilidad de Petro. En primer lugar, si bien el país se construye desde las regiones, Colombia es centralista y su sistema político presidencialista lo cual tiene una incidencia enorme en las políticas públicas dada la disposición de medios con que cuenta el presidente para gobernar. En segundo lugar, está claro que como en toda actividad humana cabe la posibilidad de enmendar errores y cambiar de tácticas para lograr un propósito.

Si bien Petro ha perdido apoyo y capital político, también es cierto que conserva la lealtad de sus partidarios más cercanos, el voto que ha mantenido a lo largo de su carrera política, representado en muchas organizaciones de distinta naturaleza como sindicatos, movimientos de mujeres, víctimas y partidos políticos. Hasta el momento ha fallado la comunicación en el Pacto Histórico, pero no está escrito que no se puedan encontrar nuevas sinergias alrededor de temas neurálgicos como la paz global, las reformas a la salud y al trabajo.

En un intento por esquivar debates de interés para la política del Gobierno, la mayoría de los partidos y maquinarias que difunden noticias políticas han convertido a la seguridad en un tema omnipresente en la agenda haciendo énfasis en secuestros, acciones violentas de grupos al margen de la ley, conflictos sociales y violencia de género convirtiendo al orden público en un tema álgido, pero sin mencionar las causas profundas de su deterioro y proponiendo como remedio primordial más policía, más pie de fuerza y más mano dura.

Se ha dicho que el papel de los gobiernos locales en la solución de los problemas es crucial para la solución de las necesidades más apremiantes de las comunidades y que, en ese

sentido, las próximas elecciones serán decisivas para el futuro de las regiones por el peligro de que en el nuevo mapa político tengan lugar actores armados que buscan sacar provecho de las mismas. Ello presupone la elección de buenos gobernantes y olvidar que también en el nivel local se pierde una buena tajada de los recursos públicos. Por ello apenas se oyen voces apagadas que mencionan cómo los clanes políticos buscan a toda costa mantener el control regional.

Se habla de un Gobierno incompetente, superado por las circunstancias, pero poco se dice del hecho de que muchos políticos no aspiran a cargos públicos para hacer Política sino a vivir del erario, a tener acceso a contratos y licitaciones o a mantener el control sobre el territorio controlando el acceso a la burocracia

Podría pensarse que las elecciones que se avecinan son decisivas para el futuro de las regiones, pero lo cierto es que la política, convertida en mercado electoral, ha reducido la palabra a la cuña o al *slogan*, a la promoción de la imagen, al personalismo y al tribalismo. La gobernabilidad del presidente Petro seguirá encontrado obstáculos propios de la política que ha primado en el país desde hace décadas. *Sin novedad en el frente*.

Rubén Sánchez David

Foto tomada de: France 24